

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°005

Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la **EPS MEDIMÁS**, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor **FRANCISCO JAVIER MORALES VALENCIA** contra **JHON FREDY ARISTIZABAL DUQUE, JESÚS ARGEMIRO ARISTIZABAL DUQUE** y la **EPS MEDIMÁS**.

ANTECEDENTES

Pretensiones

Solicita el demandante que se declare la existencia de un contrato de trabajo con los señores **Jhon Fredy y Jesús Argemiro Aristizabal Duque**, el cual terminó sin justa causa mientras se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud; y, en consecuencia, se condene a los empleadores a reintegrarlo con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

De otra parte, solicitó que se condene a **Medimás EPS** al reconocimiento de las prestaciones económicas por incapacidad causadas y no pagadas (fls.1/2).

Hechos

El demandante prestó sus servicios a los señores **Jhon Fredy y Jesús Argemiro Aristizabal Duque** desde el **1 de noviembre de 2014**,

desempeñándose como Cajero Administrador del bar “New York N°2” recibiendo en contraprestación un salario promedio mensual de **\$1'500.000**.

El **19 de febrero de 2015**, sufrió un accidente de tránsito que lo mantuvo incapacitado durante un largo periodo de tiempo sin que por parte de la EPS Medimás se le cancelara el subsidio de incapacidad, aduciendo que existían inconsistencias en los pagos efectuados por el empleador.

El **14 de julio de 2017**, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del **28,37%**, experticia impugnada, sin que a la fecha de presentación de la demanda se resolviera el recurso.

El **10 de abril de 2018**, fue despedido por sus empleadores aduciendo como justa causa: la inasistencia sin justificación a sus labores, afirmación que no es cierta, dado que, para aquella fecha aún se encontraba incapacitado.

En razón de las constantes violaciones de sus derechos promovió acción de tutela contra sus empleadores y la EPS Medimás, misma que concedió sus derechos de forma transitoria y en la que se ordenó su reintegro y el pago del subsidio de incapacidad, no obstante, los accionados no dieron cumplimiento adeudándose a la fecha de presentación de la demanda 930 días por subsidio de incapacidad (fls.2/4).

Contestación Medimás EPS

La EPS demandada a través de apoderado, manifestó que no le constan los hechos que tienen que ver con la relación laboral, e indicó en lo referente al pago de incapacidades que cumplió con el pago de las generadas entre el 18 de agosto de 2017 y el 15 de marzo de 2018, que las comprendidas entre el 16 de marzo de 2018 y el 14 de mayo de 2018 son responsabilidad del fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado el actor y que las causadas entre el 5 de septiembre de 2018 y el 18 de marzo de 2019 se encuentran liquidadas y son susceptibles de cobro por parte del empleador.

Se opuso a la prosperidad de lo pretendido en su contra y propuso como excepciones: falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, referirse la demanda a una relación sustancial en la cual no es parte y cosa juzgada (fls.109/119).

Del desistimiento parcial de las pretensiones

Mediante auto del **10 de junio de 2019**, la juez del conocimiento aceptó el desistimiento presentado por el demandante frente a las pretensiones dirigidas

contra los señores **Jhon Fredy y Jesús Argemiro Aristizabal Duque**, y en consecuencia, continuó el proceso solo con respecto de lo pretendido frente a **Medimás EPS** (fls.214/215).

Sentencia de Primera Instancia

La Juez Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **31 de julio de 2019**, condenó a **Medimás EPS** a reconocer y pagar al señor **Francisco Javier Morales Valencia** la suma de **\$5'728.516** por concepto de subsidio de incapacidad, cifra que deberá ser indexada al momento de su pago.

Para fundamentar su decisión indicó que de conformidad con lo establecido en la Ley 1753 de 2015, es responsabilidad de la EPS el pago de las incapacidades cuando estas superan 540 días, como sucede en el caso que se estudia, sin que pueda la EPS proponer para su no pago barreras administrativas o aducir falta de pago en cotizaciones para abstenerse del pago de las mismas, en ese sentido indicó que debía demostrar **Medimás EPS** que pagó las incapacidades debidamente generadas, lo que en el caso de autos no se verifica pese a que en algunos periodos advierte incluso que se encuentran liquidadas.

Inconforme con esta decisión el apoderado de la EPS demandada, la recurrió, sustentando su recurso en los siguientes términos generales:

Recurso Medimás EPS

Solicita el apoderado de **Medimás EPS** que no se imponga el pago del subsidio de incapacidad, esto en razón de que en ningún momento ha negado que deba a su afiliado el pago de unas incapacidades causadas entre el mes de marzo de 2018 y marzo de 2019, sin embargo, el actor no ha cumplido con los requisitos exigidos para el pago de la misma a través de un procedimiento administrativo que resulta más expedito que el proceso ordinario laboral.

Alegatos de conclusión

Corrido el término para alegatos establecido en el Decreto 806 de 2020, la apoderada de **Medimas EPS** presentó alegatos de conclusión en los que solicitó que se **revoque** la decisión de primera instancia argumentando al efecto que la entidad que representa no debe pagar incapacidades que son anteriores a su creación que fue el **19 de junio de 2017**. En ese sentido expresó que se debe tener en cuenta que **Cafesalud EPS** y **Medimas EPS** son personas jurídicas diferentes y cada una está llamada a responder por los periodos en que el demandante fue su afiliado, dejando claro que la función de

aseguramiento solo fue asumida por esta última entidad a partir del **1 de agosto de 2017**.

En lo referente a cada uno de los periodos por los que se condenó al pago de incapacidad expresó lo siguiente:

Entre el **16 de marzo** y el **16 de agosto de 2018** existe una interrupción superior a 30 días y teniendo en cuenta el artículo 2 de la Resolución 2266 de 1998, no es posible su pago, puesto que no es aplicable en este caso el concepto de prórroga.

En lo referente a las incapacidades causadas entre el **16 de agosto** y el 04 de septiembre del 2018 el demandante no registra periodos mínimos de cotización por lo tanto tampoco hay responsabilidad de pago de conformidad con lo establecido en el Decreto 1804 de 1999.

Finalmente, las incapacidades referentes al **05 de septiembre del 2018 al 19 de enero del 2019** se encuentran en estado liquidadas y para su pago se debe radicar una cuenta de cobro por cada mes causado, y para este efecto se debe presentar los siguientes documentos: Formato de solicitud de pago, Certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 30 días o fotocopia de RUT, y certificado bancario que permita recibir transferencias electrónicas.

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso interpuesto, será: (i) Establecer si antes de acudir al juez ordinario laboral para reclamar el pago de prestaciones económicas del sistema de seguridad social en salud es necesario agotar el trámite administrativo ante la EPS para el reconocimiento del mismo.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver, considera la Sala importante hacer las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. El señor **Francisco Javier Morales Valencia** se encuentra afiliado a la **EPS Medimás** (fl.122).
2. El actor promovió acción de tutela en contra de la **EPS Medimás** para que se reconociera y pague las incapacidades generadas a partir del día 541, solicitud que fue acogida por el Juzgado Quinto Administrativo de

Oralidad de Medellín, que en sentencia del **8 de mayo de 2018** ordenó como mecanismo transitorio de protección reconocer el pago de incapacidades (fls.11/22).

3. Esta decisión fue impugnada y confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 15 de junio de 2018 (fls.23/29).
4. Conforme certificación expedida por la **EPS Medimás** al señor **Morales Valencia** se le adeuda las incapacidades generadas entre el 16 de marzo de 2018 y el 14 de mayo de 2018, entre el 16 de agosto de 2018 y el 19 de enero de 2019 y entre el 20 de febrero de 2019 y el 18 de marzo de 2019, las cuales suman un valor total de **\$5'728.516** (fl.120).

A partir de los anteriores hechos procederá a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento.

De la finalidad de los alegatos de conclusión

Se presenta por parte de la entidad demandada en sus alegatos de conclusión unos argumentos que resultan totalmente diferentes a los sostenidos al momento de sustentar su recurso de apelación, circunstancia que hace necesario recordar cual es la finalidad de esta etapa procesal en el procedimiento laboral indicando que estos son una oportunidad que se otorga a las partes para manifestar la “conclusión” a que debe llegar el Tribunal luego de analizar los fundamentos de hecho, derecho y las pruebas aportadas al proceso, pero no implica la posibilidad de adicionar o exponer nuevas estrategias defensivas, por cuanto este tipo de actuaciones comprometería el debido proceso, en razón a que la parte en contra de la cual se presentan no tendría la oportunidad de oponerse a los mismos.

Lo anterior se explica desde la estructura del procedimiento laboral y es por ello que las razones de desacuerdo deben ser expuestas ante el juez de primera instancia, dando lo allí expuesto el marco de la congruencia a la que hace alusión el artículo 66ª del CPT y SS, siendo estos los argumentos que servirán de base para decisión de la segunda instancia.

En ese orden, los planteamientos expuestos en los alegatos por la apoderada de **Medimas EPS** rompen ese marco de la congruencia sin que las nuevas objeciones al fallo de primera instancia estén llamadas a prosperar y es que para desestimarlas basta con evidenciar que la más antigua de las incapacidades cuyo pago se condenó data del **16 de marzo de 2018** momento

para el cual dicha entidad ya había asumido funciones pues como se afirma en el mismo escrito de alegatos asumió los anteriores afiliados a **Cafesalud EPS** desde el **1 de agosto de 2017**.

Del trámite administrativo para el cobro del subsidio de incapacidad

Se indica por parte del apoderado de la **EPS Medimás** que en el presente proceso el demandante debió adelantar ante esa entidad el trámite administrativo para el pago del subsidio de incapacidad sin que el medio indicado para ello sea el proceso ordinario laboral.

Con respecto al señalamiento del apelante, es claro para la Sala que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1. del DUR 780 de 2016, el procedimiento para el cobro de prestaciones económicas deberá ser realizado de forma directa ante esas entidades, para lo cual estas pueden fijar procedimientos que se cumplan dentro los siguientes plazos: (i) revisar la solicitud y efectuar la liquidación de la prestación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación de la misma y (ii) proceder con su pago en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la autorización.

El trámite dispuesto en la norma, sin duda, establece unos términos más ágiles que los del procedimiento ordinario laboral, y es que no se puede perder de vista que lo reclamado tiene por finalidad reemplazar el ingreso percibido por el afiliado mientras se encuentra incapacitado para laborar.

En este caso se señala por parte del recurrente que antes de acudir al trámite de un proceso ordinario laboral debió su afiliado efectuar la reclamación a través del procedimiento administrativo fijado por esa entidad, argumento que desconoce la realidad probatoria demostrada en el proceso, y para ello se debe comenzar por decir que la **EPS Medimás** como se advierte a folios 120 del expediente conocía de las reclamaciones de su afiliado no solo porque se cumplió un procedimiento administrativo, sino porque se le ordenó por parte de juez constitucional en sentencia del **8 de mayo de 2018** que efectuara el pago de las incapacidades causadas hasta ese momento, mandato que desconoció, pues no se prueba en el expediente que haya pagado los periodos de incapacidad acreditados por su afiliado.

En esa línea la conducta de la EPS demanda resulta contraria a lo reiterado en múltiples oportunidades por la Corte Constitucional en el sentido de que no se pueden imponer barreras administrativas para el disfrute de derechos fundamentales como lo es la seguridad social y en concreto el pago de incapacidades cuando se afecta el mínimo vital de las personas, sobre este tema

se dijo en la sentencia T-161 de 2019:

Las referidas medidas de protección buscan reconocer la importancia que tiene el salario de los trabajadores en la salvaguarda de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna. Así lo ha sostenido esta Corporación al referirse particularmente a las incapacidades, estableciendo que el procedimiento para el pago de las mismas se han creado “(...) en aras de garantizar que la persona afectada no interrumpa sus tratamientos médicos o que pueda percibir un sustento económico a título de incapacidad o de pensión de invalidez, cuando sea el caso. Tal hecho permite concluir que el Sistema de Seguridad Social está concebido como un engranaje en el cual se establece que ante una eventual contingencia exista una respuesta apropiada”

Así las cosas, coincide la Sala con el impugnante en que el pago de las incapacidades objeto de condena debió hacerse por parte de la entidad que representa de forma pronta, sin embargo, como tal actuar no aconteció, el demandante de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2° del CPT y SS, podía reclamar ante el juez laboral el reconocimiento de los derechos que consideraba desconocidos por la EPS demandada, como en efecto aconteció.

En el anterior orden de ideas, y como quiera que es clara la competencia con que cuenta el juez ordinario laboral para conocer de las controversias entre un afiliado y las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, encuentra la Sala que no le asiste razón al recurrente y en ese sentido se **confirmará** la decisión de primera instancia.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de **Medimás EPS** y en favor del demandante por haberse resuelto de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto, en atención a lo establecido por el numeral 1) del artículo 365 del Código General del Proceso. Las agencias de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PSSA16-10554 se fijan en la suma de **\$908.526**.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por la Juez Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, proferida el **31 de julio de 2019**, en el proceso ordinario adelantado por el señor **FRANCISCO JAVIER MORALES VALENCIA** contra la **EPS MEDIMÁS**.

Costas en esta instancia a cargo de **MEDIMÁS EPS** y en favor del demandante. Las agencias de conformidad se fijan en la suma de **\$908.526**.

La anterior decisión se notifica en **ESTADOS**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS N° 015** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín, 1 de febrero de 2021

Secretario.